

Punta Arenas, seis de mayo de dos mil veintiuno.

**VISTOS**

Con fecha dieciséis de marzo del presente, comparece ante esta Corte doña **Margarita del Carmen Mardones Torres**, cédula nacional de identidad N°11.693.355-1, chilena, divorciada, trabajadora dependiente, con domicilio en Ignacio Carrera Pinto N°01750, Block B, departamento 303, de la comuna y ciudad de Punta Arenas, interponiendo recurso de protección en su favor y en contra de la **Superintendencia De Seguridad Social**, en adelante **SUSESO**, Rol Único Tributario N°61.509.000-K, representado legalmente por don Claudio Lautaro Reyes Barrientos, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Huérfanos N°1376, Santiago Región Metropolitana; y en contra de la **Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes**, en adelante **COMPIN**, representado legalmente por su Jefe de Comisión doña Maria Jimena Diaz Águila, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Manuel Bulnes N°0136, comuna y ciudad de Punta Arenas.

Indica en cuanto a los hechos, que de conformidad al último informe médico emitido por don Jaime Cristian Álvarez Uzabeaga, médico psiquiatra, se encuentra con un tratamiento activo desde el mes de abril 2019, todo ello por la irrupción en crisis de severos estresores, además, sufre de crisis de disforia, irritabilidad, y conductas explosivas intermitentes, comenzando a tener trastorno del sueño, cambios explosivos de su carácter, agobio por trabajo, todo ello acompañado de diversas crisis; presentó además un trastorno mixto angustioso depresivo con severos psicoestresores medioambientales, que, actuando en forma conjunta, le producen un desequilibrio clínico con síntomas característicos, como por ejemplo, humor deprimido, pérdida



de energía, trastornos mixtos del sueño, ansiedad, trastornos del apetito, entre otros.

Hace presente, que en nuestro país, todo aquello relacionado con enfermedades psiquiátricas conlleva además un gasto adicional en medicamentos que son de muy alto costo, sumado al trámite que cada persona debe realizar para poder cobrar cada licencia médica, que por lo demás, son emitidas por los profesionales competentes y con las capacidades profesionales necesarias para emitir su diagnóstico.

Sin embargo, en su caso, el cuestionamiento y el rechazo del pago de las diversas licencias sólo se encuentra fundado en conceptos técnicos inadecuados que no van acorde a su realidad y estado de salud, tanto física como mental.

Señala que las licencias médicas rechazadas, N°42305352-6; N°43129797-3; N°44083911-8; N°45111699-1; y N°45997282-K, por el COMPIN y SUSESO, no son valoradas conforme al cuadro clínico que presenta, sino que, su rechazo aboga a un reposo ya realizado, y además, se enfatiza en su reintegro a la vida laboral, situación que de conformidad al diagnóstico del médico tratante, es totalmente inviable en estos momentos.

Plantea que cada licencia está suscrita por el médico tratante, se consignan expresamente cada una de sus patologías y trastornos que han ido en aumento, enfatizando, además, que no puede realizar actividad laboral.

No obstante, lo anterior, y resolviendo en contra de dichos antecedentes, la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, procedió al rechazo de las licencias médicas, afectando con ello, su salud, vida e integridad psíquica.

El rechazo de sus licencias, como ya se había mencionado, aboga principalmente en un reposo ya cumplido, sin analizar, enfocar, ni mucho menos percibir los efectos que hoy en día se presentan en su funcionamiento físico y



psicológico, donde cada trastorno que ha sufrido se ha manifestado aún más en estos tiempos de pandemia y estado de catástrofe declarado constitucionalmente.

En esta oportunidad su recurso no sólo se funda en los antecedentes médicos, los cuales hace valer de forma concisa y acabada, sino que además hace valer argumentos jurídicos y constitucionales que respaldan cabalmente su situación desmejorada ante los organismos del Estado competentes en la materia, es por ello, que de conformidad a lo anteriormente expuesto, hace presente la normativa constitucional vigente en el caso de protección a los derechos conculcados en nuestro país para la protección de cada ciudadano.

En su caso se tuvo conocimiento o noticias a través de un correo electrónico de fecha 16 de febrero de 2021, informándole de la negativa a su solicitud.

Esgrime que los tribunales superiores de justicia han sentenciado que: *"la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún la inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón"*. (Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 22 de septiembre de 1993, Revista Gaceta Jurídica, N° 166, pág. 90; Corte de Apelaciones de Santiago, 05 de Marzo de 1.992, Revista Gaceta Jurídica, N° 141, pág. 90; Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de Abril de 1.993, Revista Gaceta Jurídica, N° 154, pág. 64; Corte Suprema, 26 de Septiembre de 1.996, Revista Gaceta Jurídica, N° 195, pág. 64).

De acuerdo con lo anterior, la respuesta de la parte recurrida es arbitraria, carece de razonabilidad y contraria a derecho.



Revela que al ser dueña del pago de sus licencias médicas presentadas, es de toda lógica y justicia, el que perciba el pago por dicho concepto, no siendo así y acogiendo la conducta arbitraria e ilegal de las recurridas de no proceder conforme al texto legal expreso de la normativa que regula el pago de licencias médicas, por lo que en el ejercicio de esta acción, se exige como presupuesto necesario, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguna de las garantías protegidas en nuestra Carta Fundamental.

Señala que el supuesto contenido de la norma citada se da en la especie, toda vez que la resolución exenta N°R-01-UME-18427-2021, de la SUSESO es injustificada, manteniendo así la decisión de la COMPIN de no pagar sus licencias médicas presentadas, comunicándosele dicho hecho el día 16 de febrero de 2021 confirmando que la SUSESO rechazaba las licencias médicas a) N° 42305352-6; b) N° 43129797-3; c) N° 44083911-8; d) N°45111699-1; y e) N° 45997282-K, por lo que el actuar de estos órganos del Estado es un grave atentado al libre y legítimo ejercicio de los siguientes derechos fundamentales que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, sin distinción alguna.

La Constitución Política de la República de Chile, resguarda los derechos, al momento de existir actos arbitrales e ilegales.

En el ejercicio de su derecho y acción de protección ante la autoridad competente, en este caso existe una consecuencia inmediata que origina una situación determinante de privación, amenaza o perturbación de su garantía constitucional, toda vez que las resoluciones anteriores de la SUSESO son injustificadas, manteniendo así la decisión de la COMPIN de no pagar sus licencias médicas presentadas por



indicar un reposo ya cumplido, por lo que tal resolución atenta al libre y legítimo ejercicio de los siguientes derechos fundamentales.

Esgrime vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, ya que el no pago de las licencias, no sólo afecta su tratamiento médico, por no tener los medios económicos suficientes, sino que también los rechazos de forma continua han generado un deterioro en la salud sobre todo mental.

En cuanto a la igualdad ante la ley, indica que se ha vulnerado ya que se ha procedido de forma arbitraria a efectuar una discriminación, luego indica vulneración en la protección del ejercicio de sus derechos, ya que no se le ha respetado el derecho a la vida y a la salud.

La seguridad social de todo trabajador es un elemento esencial que debe ser resguardado por las entidades competentes, en este caso, el actuar de los entes fiscalizadores ha restringido unilateralmente su derecho a una prestación básica de salud como es el pago de una licencia médica.

La respuesta negativa de los entes fiscalizadores, respecto de los rechazos de sus licencias médicas, sin justificar el rechazo conforme a estudios acabados de su caso, argumentando así una decisión sin antecedentes, que indiquen y avalen su decisión, restringe de manera total y absoluta sus facultades económicas.

En virtud de los antecedentes expuestos en el presente escrito, y conforme a las disposiciones legales reproducidas, sostiene que en su caso ha existido acto que vulnera sus derechos, no permitiéndole disponer y utilizar de los montos por concepto de licencias médicas presentadas, privándole de esa forma de contar con lo necesario para cubrir cabalmente



con sus necesidades, más aún en la situación que hoy en día nos encontramos.

Existen fundamentos plausibles, teniendo a disposición todo su historial de salud a través del tiempo, de igual forma proceden a confirmar los rechazos de sus licencias médicas, alejándose de esta forma totalmente a lo que establecen las normas al respecto, teniendo presente que en ellas y en los antecedentes tenidos a la vista, se señala en forma expresa, claramente, y que no genera dudas razonables al respecto, su condición de salud psíquica.

Esgrime que también se ha afectado su derecho a la propiedad.

Transcribe parte del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica en causa N°18-2021 de Protección.

Que, en consecuencia, la fundamentación entregada por la autoridad torna la decisión adoptada en la Resolución Exenta N°R-01-UME-18427-2021, de fecha 16 de febrero de 2021, en una arbitraria ya que está desprovista de argumentos suficientes que la justifican y se sustentan en sólo capricho o mera voluntad del que la adopta, lo que vulnera las garantías constitucionales ya indicadas.

Solicita se sirva tener por interpuesta la presente Acción Constitucional de Protección, en contra del acto arbitrario e ilegal, en atención al rechazo de las licencias médicas, en contra de la de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes, admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se ha vulnerado su derecho de propiedad en los términos expuestos en el presente recurso, y ordenar en definitiva, se declare que se acoja el pago de las licencias que aún se encuentran pendientes, de forma íntegra, ya que en virtud de los antecedentes presentados, éstas dan cuenta de



una patología cierta y que le ha impedido trabajar, que tiene todo el derecho a que, como trabajadora, se le pague su subsidio por licencia médica, cuestión que en este caso no ha ocurrido al proceder a rechazarlas sin fundamento plausibles; se corrija las resoluciones que han rechazado las licencias médicas indicadas, y se condene expresamente en costas a las recurridas.

Con fecha siete de abril informa Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Inicia su presentación solicitando el rechazo del recurso por haberse interpuesto en forma extemporánea al haberse ejercido, contrariando su evidente naturaleza cautelar, como una vía de impugnación subsidiaria a las otras que contempla el procedimiento establecido en el Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, a través del cual los organismos administradores de este derecho se pronuncian acerca de la autorización, rechazó o modificación de las licencias médicas.

Indica que el presente recurso se interpuso una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta acción constitucional, ya que con fecha 22 de marzo de 2021 se intenta la presente acción, y la actora recurrió ante esa Superintendencia con fecha 22 de diciembre de 2020, por lo cual el COMPIN de Magallanes y la Antártica Chilena confirmó el rechazo de las licencias médicas, extendidas por un total de 150 días a contar del 20 de julio de 2020, por reposo no justificado.

La Superintendencia estudió los antecedentes y concluyó que el reposo por las licencias médicas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en la resolución recurrida de fecha 16 de febrero de 2021.



Consta que la recurrente concurrió previamente al Compin de Magallanes y la Antártica Chilena reclamando por el rechazo de las licencias médicas, presentación que fue desestimada el 29 de julio de 2020.

Por lo anterior, se evidencia que ha pasado más de sesenta días, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

Indica que el hecho de haber reclamado ante esa Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esa institución de control.





Argumenta que por los hechos expuestos aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción constitucional.

Lo que ha sido recogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisibile el recurso de protección Rol 81.839-2014 de 14 de diciembre de 2014.

Agrega que la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales.

Lo que también ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema, que revocó lo sentenciado en causa Rol N°33.184-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Solicita se rechace la presente acción de protección por extemporánea.

En subsidio de lo anterior plantea improcedencia de la acción de protección en materia de Seguridad Social, ya que la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia de este recurso, ya que la garantía constitucional no se encuentra protegida por la acción interpuesta.

En subsidio informa en cuanto al fondo del asunto, estableciendo que consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. Mardones recurrió ante esa Superintendencia, mediante presentación de fecha 22 de diciembre de 2020, reclamando por cuanto la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 42305352-6, 43129797-3,



44083911-8, 45111699-1, 45997282-K, extendidas por un total de 150 días a contar del 26 de julio de 2020, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el informe emitido, con fecha 22 de diciembre de 2020, por el tratante no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo, así como tampoco el tratamiento farmacológico indicado. Sumado a lo anterior la Sra. Mardones no acredita haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo que alcanza en su totalidad a los 660 días. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal, dictamen y fundamentos contenidos expresamente en Resolución Exenta N°R-01-UME-18427-2021, de fecha 16 de febrero de 2021.

Destaca que en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente del recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: "*Dr. Matías Moreno. Ficha Médica. Sección C (Antecedentes Médicos): IMC (informe médico complementario) emitido por psiquiatra AE (alto emisor), señala atenciones desde abril del 2019, donde se encontraba con crisis de severos estresores, con disforia, irritabilidad, conductas explosivas, humor deprimido, anhedonia, insomnio, ansiedad, síntomas cognitivos y quejas somáticas. Describe variados síntomas inespecíficos, ya expuestos anteriormente, aparenta informe "tipo" (repite lo ya escrito anteriormente). Evolución tórpidas. No describe tratamiento farmacológico, FPA (fecha probable de alta), ni tampoco haber realizado psicoterapia. Peritaje COMPIN del 05/06/2019, comienza con reposos luego de discusión con jefe*



directo, GAF 58, compromiso moderado de capacidad funcional, "Probablemente necesitará 20 o 30 días más de LM". Peritaje COMPIN 15/01/2020 "A juicio del especialista, sin grandes cambios a pesar de estar con reposo continuo hace 10 meses, le impresiona como ganancial" (...) Sección D (Fundamentos de la resolución): Con 330 días autorizados y 300 rechazados por patología psiquiátrica. IMC Sin GAF, sin psicoterapia, sin farmacoterapia, sin derivación a sistema público para atención integral. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, se sugiere no acoger".

Sin perjuicio de lo anterior, consta que la Sra. Mardones recurrió previamente ante la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, reclamando por el rechazo de la licencia médica N° 42305352-6, presentación que fue desestimada, mediante Resolución Licencia Médica, de fecha 29 de julio de 2020, según registra el documento *Listado Maestro de Licencias Médicas* de Fonasa. Lo propio se resolvió respecto de las licencias médicas N° 43129797-3, 44083911-8, 45111699-1, 45997282-K, en orden a confirmar su rechazo por la misma entidad previsional.

A mayor abundamiento, como fundamento del rechazo de las licencias médicas reclamadas en autos, se registró en Cartola Médica COMPIN, la evaluación presencial de la recurrente en dos oportunidades, una de las cuales se realizó, con fecha 15 de enero de 2020, y que en lo pertinente informa: "A juicio del especialista, sin grandes cambios a pesar de estar con reposo continuo hace 10 meses, le impresiona como ganancial. Con respecto de su trabajo no hay decisiones claras pero insiste en que no puede volver a conducir camiones además que la mina invierno se encuentra proceso de cierre. Se citará en marzo de tener licencia vigente, manifiesta que su tratante le sugiere alta en el control que tendrá ahora a fines de



*enero. Se le explica la normativa y el carácter de transitorio del reposo para que lo comente con su tratante".*

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. N° 1, del año 2005, y en el D.S. N° 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad



laboral (regulado en el D.F.L. N° 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: *"Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social"*.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1° del Decreto Supremo N°3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias



médicas, en los siguientes términos: "Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...".

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21° del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud de nuevos informes médicos.

Adicionalmente, el D.S. N°7, que Aprueba Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las Patologías Mentales, en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: "Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier



diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnóstico principal.

Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral.

Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquiatra por periodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente).

Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3° de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia



de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia". El inc. 2° del mismo artículo indica que: "La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones."

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley N° 16.395 señala que: "En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades".

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al





disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario "... *sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19...*". En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. Mardones, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, el sólo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984 y DFL. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto



la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, dispone que: *"Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso."*

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el D.S. N°3, de



1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta por doña Margarita Del Carmen Mardones Torres, solicitando sea desestimada en todas sus partes con expresa condena en costas.

Con fecha veinte de abril del presente, informa Eduardo Castillo Vera, Secretario Regional Ministerial de Salud(S).

Que respecto a lo señalado por la recurrente y en virtud de los antecedentes que se encuentran en su haber pueden expresar lo siguiente:

1.- Que la recurrente había reclamado por el rechazo de la licencia médica N°42305352-6, presentación que fue desestimada por la COMPIN con fecha 29 de julio de 2020, sucediendo los mismo con las licencias médicas N°42305352-6, N°43129797-3, N°44083911-8, N°45111699-1 y N° 45997282-K.



2.- Que en relación con lo anterior, se concluye que transcurrieron más de sesenta días desde que la recurrente interpone dicha acción, y en consecuencia toma conocimiento del rechazo de las licencias médicas, cuya improcedencia pretende discutir a través de la presente acción constitucional. Por lo que el plazo para la interposición del presente recurso de protección habría expirado con creces, siendo esta acción impetrada por la contraria a todas luces de forma extemporánea

3.- Que efectivamente COMPIN Magallanes rechaza las licencias médicas N°42305352-6, N°43129797-3, N°44083911-8, N°45111699-1 y N° 45997282-K. Sin embargo, se le informa sobre las instancias existentes para reclamar los rechazos precedentemente expuestos.

4.- Señala que las licencias médicas en comento suma un total de 150 días a contar del 26 de julio de 2020, rechazadas por reposo injustificado, la conclusión por la cual se estima esta causal de rechazo se basó en el informe emitido, con fecha 22 de diciembre de 2020 por el mismo médico tratante de la recurrente, en el cual expresamente se señala que "no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo"

5.- Que como ya se ha señalado en irrepetibles ocasiones, la naturaleza de la licencia médica es la transitoriedad, es así como el artículo 1 del *Decreto Supremo N°3/1984 "Reglamento sobre autorización de licencias médicas"* la define y deja en claro que el objetivo es la recuperación del trabajador, para el cual le asiste el derecho de ausentarse por un "determinado lapso de tiempo" desestimando de esta forma la posibilidad de eternizar esta situación, sino muy por el contrario propendiendo siempre a su reintegro a la actividad laboral.



6.- Que el Decreto Supremo N°7/2013 "Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas" en su artículo 4° señala requisitos expresos para aquellas patologías mentales cuyo reposo laboral supere los 60 días, las que pudieren prorrogarse hasta por 180, siempre y cuando dichos requisitos se cumplan entre ellos la refractariedad o resistencia al tratamiento, lo que no ocurre con la recurrente según los antecedentes tenidos a su haber.

7.- Que así las cosas, se permite colegir que la COMPIN, no ha dictado u omitido acto alguno de carácter ilegal o arbitrario, sino que ha actuado en todo momento con estricto apego a lo establecido en la normativa vigente, precedentemente expuesta, por lo que de los antecedentes expuestos y acompañados, no cabe sino concluir que esta autoridad sanitaria no ha cometido acto u omisión alguna que infrinja las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, careciendo de fundamentación la acción de protección interpuesta.

Solicita se tenga por acompañado el presente informe y desestime en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos, por cuanto estima no se dan los presupuestos para ello, con costas.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.



Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

**SEGUNDO:** Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en la decisión de la recurrida, de confirmar el rechazo de las 5 licencias médicas, que le otorgaron reposo por 150 días desde el 26 de julio del año 2020, determinación que considera carece de fundamentos suficientes, lo que implica no percibir pago por dicho concepto.

**TERCERO:** Que, a su turno las recurridas, informan al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción, alegando su extemporaneidad e improcedencia, en primer término, para luego negar la existencia de alguna vulneración respecto de las garantías constitucionales del recurrente, por cuanto su actuar se encuadra dentro del ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias.

**CUARTO:** Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, será desestimada por cuanto el recurrente impugna la resolución emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, N° R-01-UME-18427-2021 de 16 de febrero de 2021, que vino a confirmar el rechazo efectuado por la COMPIN de las licencias médicas N°42305352-6, N°43129797-3, N°44083911-8, N°45111699-1 y N° 45997282-K, extendidas por un total de 150 días a contar del 26 de julio de 2020, por reposo no justificado y habiéndose interpuesto el recurso el 16 de marzo de 2021, lo ha sido dentro del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado que regula esta acción



constitucional.

**QUINTO:** Que en orden a la alegación de improcedencia del recurso de protección por tratarse de un derecho a la seguridad social reconocido y garantizado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en su artículo 20, se disiente de tal aserto porque, justamente, se trata de verificar si procede la tutela judicial en un caso en que se está alegando que el actuar sería ilegal y arbitrario y afectaría el derecho a la vida e integridad física y psíquica, de igualdad ante la ley y de propiedad, garantías amparadas por esta acción constitucional.

**SEXTO:** Que, es necesario considerar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez Instituciones de Salud Previsional, dispone que la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia. Asimismo, se les otorga la facultad de disponer de acuerdo con sus medios, algunas de las medidas contempladas en el artículo 21 del referido reglamento, entre otras las de la letra a), esto es, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, o la signada en la letra e) que permite disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

**SEPTIMO:** Que, las licencias médicas N°42305352-6, N°43129797-3, N°44083911-8, N°45111699-1 y N° 45997282-K, extendidas por un total de 150 días a contar del 26 de julio



de 2020, por reposo no justificado, fueron reclamadas ante el COMPIN Región de Magallanes y Antártica Chilena, institución que confirmó el rechazo de las aludidas licencias médicas, y se le indicó a la reclamante sobre las instancias existentes para reclamar de dichos rechazos, recurso que efectivamente la recurrente interpuso mediante presentación de fecha 22 de diciembre de 2020 ante la Superintendencia de Seguridad Social.

**OCTAVO:** Que la Resolución Exenta N° R-01-UME-18427-2021 Santiago, 16 de febrero de 2021 señala: "CONSIDERANDO: Que, ha recurrido con fecha 22 de diciembre de 2020 a esta Superintendencia doña MARGARITA DEL CARMEN MARDONES TORRES, RUN 11.693.355-1, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 42305352-6, 43129797-3, 44083911-8, 45111699-1, 45997282-K, extendidas por un total de 150 días a contar del 26 de julio de 2020, por reposo no justificado".

"Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 42305352-6, 43129797-3, 44083911-8, 45111699-1, 45997282-K, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe emitido con fecha 22/12/2020 por el tratante no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo, así como tampoco el tratamiento farmacológico indicado. Sumado a lo anterior la reclamante no acredita haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo que alcanza en su totalidad a los 660 días. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal".

**"RESUELVO:**

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las





licencias médicas N°s 42305352-6, 43129797-3, 44083911-8, 45111699-1, 45997282-K, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

**NOVENO:** Que cabe señalar que la Superintendencia recurrida con fecha 22 de septiembre de 2020 confirmó el rechazo de la licencia médica N°41304573-8 de doña Margarita del Carmen Mardones Torres extendida por un total de 30 días a contar del 26 de junio de 2020, por reposo no justificado. Consignando que esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 330 días continuos y por el mismo diagnóstico, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista (Peritaje, informe del tratante, no protocolizado, ni ampliamente fundado, sin clara descripción de la evolución del cuadro clínico, sin plan de tratamiento o derivación a GES y/o Programa de Salud Mental, sin detalles sobre psicoterapia).

El recién aludido rechazo no fue objeto de recurso alguno por la recurrente.

**DÉCIMO:** Que con fecha 05 de junio de 2019 se realizó peritaje psiquiátrico a la recurrida por parte de COMPIN que en lo sustancial señala que la paciente comienza con reposos luego de discusión con jefe directo, GAF 58, **compromiso moderado de capacidad funcional**, probablemente necesitará 20 o 30 días más de licencia médica.

**UNDÉCIMO:** Que con fecha 15 de enero de 2020 la Comisión Médica COMPIN en sesión N°02 que se integró entre otros por el Médico Psiquiatra don Armando Larraguibel, concluyó lo siguiente: *“Evaluación presencial, evaluada en octubre 2019, mantiene licencia médica desde abril. Ha tenido ajuste de medicamentos, actualmente en tto con clotiazepam 0-0-1, escitalopram 1-0-1, fertenmina 1-1-0, sin psicoterapia, cambió de establecimiento de la red, del Carlos Ibáñez a*



consultorio 18 septiembre, alcanzó a realizar dos sesiones con psicóloga y está en lista de espera en el nuevo consultorio. **A juicio del especialista, sin grandes cambios a pesar de estar con reposo continuo hace 10 meses, le impresiona como ganancial.** Con respecto de su trabajo no hay decisiones claras pero insiste en que no puede volver a conducir camiones además que la mina invierno se encuentra proceso de cierre. Se citará en marzo de tener licencia vigente, manifiesta que su tratante le sugiere alta en el control que tendrá ahora a fines de enero. Se le explica la normativa y el carácter de transitorio del reposo para que lo comente con su tratante. D. María Jimena Díaz; Presidenta COMPIN(s), Ana Claudia Campos; Asesora Comisión, Dr. Armando Larraguibel; Médico Psiquiatra, Claudio Hernández; Ministro de Fé”.

**DUODÉCIMO:** Que el doctor Matías Moreno de la Superintendencia recurrida informó en la Ficha Médica Licencia Médica lo siguiente: “Doctor Matías Moreno Sección C (Antecedentes Médicos): IMC (Informe Médico Complementario) emitido por psiquiatra AE (Alto Emisor) señala atenciones desde abril de 2019, donde se encontraba con crisis de severos estresores, con disforia, irritabilidad, conductas explosivas, humor deprimido, anhedonia, insomnio, ansiedad, síntomas cognitivos y quejas somáticas. Describe variados síntomas inespecíficos, ya expuestos anteriormente, “aparenta informe tipo” repite lo ya escrito anteriormente). Evolución tórpidas. No describe tratamiento farmacológico FPA (Fecha probable de alta), ni tampoco haber realizado psicoterapia. Detalle: Peritaje COMPIN del 05/06/2019, comienza con reposos luego con discusión jefe directo, GAF 58, Compromiso moderado de capacidad funcional, “Probablemente necesitará 20 a 30 días más de LM”. Peritaje COMPIN 15/01/2020 “A juicio del especialista sin grandes cambios a pesar de estar con reposos



*continuo desde hace 10 meses, le impresiona como ganancial”.*

*En la parte relativa a fundamentos de la resolución Sección D: con 330 días autorizados y 300 rechazados por patología psiquiátrica. IMC Sin GAF, sin psicoterapia, sin farmacoterapia, sin derivación a sistema público para atención integral. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, se sugiere no acoger”.*

**DÉCIMO TERCERO:** Que, estos sentenciadores concluyen que la confirmación de la Superintendencia de Seguridad Social respecto al rechazo de las licencias médicas N°s 42305352-6, 43129797-3, 44083911-8, 45111699-1, 45997282-K, ha sido una decisión adoptada dentro del ámbito de sus facultades legales.

**DECIMO CUARTO:** Que, la decisión sobre el destino de las licencias médicas, presupone que se haga sobre la base de un análisis exhaustivo de todos los antecedentes disponibles y con agotamiento de las posibilidades de contar con información experta, ineludible en materias de salud.

**DECIMO QUINTO:** Que, en consecuencia, la fundamentación entregada por la Superintendencia recurrida, basada en los antecedentes médicos tenidos a la vista, en especial en el resultado de los peritajes psiquiátricos practicados por la COMPIN a la recurrente con fecha 05 de junio de 2019 y 15 de enero de 2020 y cuyo contenido se han reseñado precedentemente; la circunstancia del reposo prolongado, autorizado por licencias ascendentes a un total de 330 días con anterioridad, el hecho de no recurrir en contra de la resolución confirmatoria de fecha 22 de septiembre de 2020 que confirmó el rechazo de la licencia médica N°41304573-8 de doña Margarita del Carmen Mardones Torres extendida por un total de 30 días a contar del 26 de junio de 2020, por reposo no justificado, por las razones anotadas en el fundamento noveno como también el análisis efectuado por el médico



psiquiatra de la Superintendencia don Matías Andrés Moreno Venegas quien sugiere no acoger y cuyo contenido se reseñó precedentemente, a juicio de estos sentenciadores torna la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, como una debidamente fundada, por lo que no nos encontramos frente a una ilegal, caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a concluir la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que en consecuencia se estima innecesario hacer un análisis sobre posible vulneración de garantías constitucionales conculcadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, **SE RECHAZA** el recurso interpuesto por doña Margarita del Carmen Mardones Torres, en contra de la **Superintendencia de Seguridad Social, y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena**, sin costas.

Redacción Ministra Sra. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

**ROL N°95-2021 PROTECCIÓN.**



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por los Ministros (as) Marcos Jorge Kusanovic A., Maria Isabel Beatriz San Martin M. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta arenas, seis de mayo de dos mil veintiuno.

En Punta arenas, a seis de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

